

A las Cortes, a pesar de Suárez

CARLOS ELORDI

La formación del nuevo Gobierno no habrá sido fácil; graves son los escollos que aún quedan por superar y muchas serán las incógnitas, las dudas, que permanecerán tras de su proclamación. De lo que no hay duda es de que la cartera del nuevo Gabinete estará repleta de temas importantes y difíciles: una Constitución democrática, la democratización de los Ayuntamientos, la amnistía, el problema de las autonomías... y la economía, hablando sólo de las cuestiones más inmediatas.

Decir que los graves problemas económicos de España constituyen uno de los temas cruciales es casi un lugar común: la campaña electoral de todos los partidos y coaliciones ha conferido una especial importancia al mismo y escuchando a los líderes se diría que todos estaban especialmente sensibilizados hacia el mismo. Que después de las elecciones se vería de lo que cada uno de ellos era capaz. Lo cierto es que las elecciones han pasado, que se ha plasmado un mapa político de acuerdo con las expectativas concretas y actuales de los 22 millones de electores. E igualmente cierto es que de economía no se habla.

Hay rumores en los círculos políticos. Y, como es lógico, los que más interesan a quienes se preocupan por la suerte de nuestra economía giran alrededor del palacio de la Moncloa. Se dice que por aquellos pagos, tras las de las nada fáciles conversaciones con los líderes de los grupos políticos que formaron Unión del Centro Democrático, se quieren retrasar algunos meses las grandes decisiones en materia de política económica. Que se confía en la inercia del sistema, que se puede ir tirando unos meses más hasta después del verano.

Una de las explicaciones que se da a esta actitud del presidente Suárez radica en las dificultades que ha encontrado a la hora de acordar una línea general de actuación económica con el socialdemócrata Fernández Ordóñez. Se dice, y bases existen para ello, que los criterios de ambos políticos —o los de Fernández Ordóñez y de los asesores del presidente, hombre no muy ducho en estas cuestiones— no coinciden. No co-

necemos más detalles, pero no es demasiado difícil adivinar por dónde pueden ir las diferencias: la intensidad del ritmo de aplicación de medidas fiscales y la concepción de la política de rentas pueden ser los temas que provoquen mayores disensiones. Unas disensiones que unidas a la pretensión de homogeneizar excesivamente UCD bajo la batuta de Suárez convirtiéndola en un gran partido parecen ser las principales causantes de las dificultades que el presidente encuentra para rematar el Gabinete.

Suárez y las municipales

Otro tema igualmente concreto podría retrasar la toma de decisiones en materia económica: las elecciones municipales. Es evidente que a más o menos corto plazo el Gobierno va a tener que democratizar la vida local. Y los partidos a la izquierda, y por supuesto el PSOE, presionan fuertemente en esta línea, aunque es probable que los plazos que comunistas y socialistas piden para la celebración de

elecciones municipales no sean idénticos. Y en este terreno, crucial para completar el mapa político del país, las cosas no pintan de buen color para el Centro Democrático.

Carece de un partido de hombres ligados a la base del pueblo y pesan sobre él, sobre todo tras la derrota de Alianza Popular, sobre quien los hombres del presidente han descargado todos los males de gestiones anteriores, el hecho de que los votantes en las municipales van a identificar en muchos de los diputados de UCD a los responsables de muchos desastrosos urbanísticos, de muchas carencias.

En estas condiciones, sin tradición de lucha en la base y con lacras iniciales tan graves, Suárez y sus hombres han de estar lógicamente preocupados por la posibilidad de que la izquierda gane las elecciones municipales. Fomentar aún más estas posibilidades de éxito con una política económica que no va a ser popular —y digamos desde este momento que va a ser muy difícil que las medidas económicas sean populares, se tomen cuando se tomen— es algo que no interesa en la Moncloa.

Así están las cosas del lado de

quienes han de formar el Gobierno. Es decir, del lado de UCD. Porque los socialistas no quieren ni oír hablar de la posibilidad de entrar en el Gabinete: "Por el momento no nos interesa", nos decía Javier Solana, el número dos del PSOE por Madrid. Multitud de causas explican esta actitud, pero, sin duda, la primordial es que Suárez, que sigue siendo el presidente, no ha llamado a los socialistas a estos efectos.

Los socialistas no transigen

El tema económico preocupa en García Morato, sede del PSOE. Preocupa, pero con menor urgencia que si algún hombre de la casa fuera miembro del Gabinete. "Nuestra posición es clara —sigue Javier Solana—, estamos en contra de cualquier tipo de pacto social, contra congelaciones salariales indiscriminadas y contra un plan económico que no contenga medidas de transformación estructural de la economía española. Sin embargo, es difícil opinar sobre cuál va a ser nuestra posición concreta respecto a la actuación económica de un Gobierno cuyos componentes no se conocen: no es lo mismo tener como ministro de Hacienda a Fernández Ordóñez que a Calvo Sotelo. No sabemos si el ministro de Hacienda va a ser nombrado por la gran Banca, como siempre ha ocurrido, o va a ser designado a tenor de los resultados electorales".

Le comentamos las dudas que existen respecto a la independencia del PSOE a la hora de trazar su política. Le insistimos en la preocupación que reina en ciertos medios en relación con la posibilidad de que los apoyos de la socialdemocracia europea puedan condicionar sus opciones políticas y en especial en materia económica. "El voto de izquierda al PSOE —nos contesta Solana— nos ha llegado a pesar de esas dudas que se han comentado públicamente a lo largo de la campaña electoral. Además, la dependencia no es tan grande como se dice y el propio triunfo del PSOE puede cambiar la estructura del socialismo europeo. De cualquier forma, y lo digo tajantemente, la supuesta dependencia no va a incidir en nuestras opciones de política económica".

El responsable del gabinete económico de UGT, Joaquín Almunia, es aún más tajante: "Estamos dispuestos a dialogar con todo el mundo, incluido con las pa-



tronaes. Pero no vamos a traicionar lo que venimos proponiendo. Queremos que la orientación fundamental de la economía esté en la línea de una política de pleno empleo, con medidas de fomento de la demanda e inversiones en sectores creadores de mano de obra. Queremos también un nuevo marco de relaciones laborales, una nueva ley de las relaciones en la empresa. Pero sí lo que se pretende, como se ha hecho en ocasiones anteriores, es que la crisis la paguen los de siempre, mediante un plan de inversiones y de restricciones salariales hasta que esas inversiones den su fruto, diremos abiertamente que no. Para la UGT es una garantía de respeto a los intereses de los trabajadores el hecho de que numerosos diputados de izquierda estén en las Cortes. Creemos que vamos a coincidir en el espíritu anterior. Pero si esos partidos de izquierda traicionan a los intereses de los trabajadores apoyando un plan económico contrario sustancialmente al que proponemos, nosotros denunciaremos a estos partidos, sean cuales sean, incluido al PSOE".

Preocupación en Comisiones

Estas palabras podrían tranquilizar a los dirigentes de Comisiones Obreras, preocupados por lo que puede hacer la UGT a la hora de debatir la política económica. "¿Va a entrar o no va a entrar en el pacto social? —se preguntaba Julián Ariza—. Porque nuestra postura está clara. No queremos pactos sociales, estamos en contra de políticas de austeridad y proponemos que la política económica se centre en la defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios y de las rentas más bajas que han de crecer más rápidamente".

Con un Gobierno que a lo peor no aborda una política económica hasta la vuelta del verano, con una situación económica aún peor que la que existía antes de las elecciones ("las soluciones económicas no pueden esperar ni un minuto", decía hace unos días Fuentes Quintana, uno de los senadores elegidos por el Rey), la opinión sindical es, sin duda, la que cuenta.

Por varias razones. Primero, porque la pausa conflictiva concedida por las centrales para permitir el proceso político sin traumas se está acabando. No creemos, y así nos lo han confirmado en UGT y Comisiones, que el fin de esa pausa adquiera la forma de fuertes movilizaciones en las próximas semanas, sino sencillamente de una normalización de las actividades propias de sindicatos reivindicativos. Las tensiones centenarias son muchas y su solución puede ser una fiel guía de cómo podrían marchar las cosas si las centrales rechazaran un plan económico del Gobierno.

Y en segundo lugar, porque la opinión de los trabajadores, explicitada a través de esas centrales y de los partidos de izquierda, va

a ser decisiva para que el plan económico sea viable. El largo desierto de la política económica durante el Gobierno Suárez fue justificado por el propio presidente en su intervención ante las cámaras de televisión el pasado mes de septiembre porque "mientras no hubiera soluciones políticas, no habría soluciones económicas". Las soluciones políticas están empezando a llegar, con la representación responsable de la izquierda en las Cortes. Pero las tentaciones de no contar con estas fuerzas a la hora de gobernar en la crisis es grande para Suárez. Sobre todo si además sobre el presidente gravita la necesidad de mantener su popularidad e incluso de aumentarla.

El contrapeso sindical

Que de la crisis no se sale si no es repartiendo justamente sus costes es algo en lo que todos, o casi todos los partidos, han coincidido verbalmente en la pasada campaña electoral. ¿Va a hacerlo el nuevo Gobierno? Por el momento hay graves dudas al respecto.

Grandes son las tentaciones de retrasar las decisiones hasta que pasen las elecciones municipales para luego poner en marcha un plan antipopular que sólo mire a los intereses de la derecha socio-económica. Las resistencias a esta actitud empiezan en el propio Centro Democrático, probablemente a través de Fernández Ordóñez. Pero el contrapeso más serio frente a este peligro real es la fuerza de las organizaciones sindicales.

500.000 afiliados tiene Comisiones Obreras. Tan sólo en el metal de Madrid más de 40.000. UGT crece, según parece, a ritmo acelerado. Probablemente en Comisiones están los hombres más avezados, cuenta con los sectores más avanzados del movimiento obrero, con la tradición de lucha y con un gran número de militantes obreros. Pero Comisiones no puede hacer la tarea sola, como ocurría hasta hace pocos años. Necesita de la UGT. Necesita que UGT no acceda a ninguna fórmula de compromiso. Y todo indica que UGT no va a entrar en compromisos: sus dirigentes así lo dicen y sus intereses objetivos así lo demuestran.

Si estas premisas se cumplen, frente a un movimiento obrero unido, el Gobierno va a tener que hilar muy fino y evitar veleidades. Y queda cada vez más claro que por las dificultades del momento y por la trascendencia del tema el programa de actuación económica tiene que ser aprobado por todos los partidos y organizaciones sindicales. Para ello no va a haber otra fórmula que debatir el programa, y aprobarlo, en las Cortes. Es la forma de que todos participen y de que cualquier propuesta sea justificada hasta el extremo, porque los parlamentarios de izquierda lo van a exigir. Y como recordatorio para todos está la probable convocatoria de elecciones municipales para dentro de poco.



Final de la Copa del Rey

MADRID FUE UNA FIESTA

Hay años en que uno está para todo: convertirse en líder de la oposición con un 30 por 100 de votos a las espaldas y vivir el triunfo del equipo de fútbol "de toda la vida", no es cosa al alcance de cualquier mortal. Si lo ha sido para Felipe González, quien —en poco más de diez días— se ha encontrado con que el PSOE se convertía en el partido mayoritario del país y con que "su" Betis lograba contra todo pronóstico la Copa del Rey. En medio de una final muy distinta a las celebradas en los últimos cuarenta años y que el propio Felipe González definiera como "una auténtica fiesta de la alegría y la libertad".

El fútbol y la política (o, si se prefiere, el fútbol y la Historia) guardan correlaciones tan extrañas como apasionantes. Que el Betis y el Athletic de Bilbao sólo se hayan enfrentado para la final de la Copa en 1931 y 1977 —es decir, en situaciones de naciente democracia después de períodos dictatoriales—, viene a ser una de ellas. Como también que, a pocas fechas de las primeras elecciones vividas por la inmensa mayoría de los españoles, se reunieran los dos equipos que tienen una más amplia base popular en nuestro país. Y que esos dos conjuntos catalicen de alguna manera las ansias de autonomía de dos nacionalidades aplastadas en su identidad desde la guerra civil.

Un partido de fútbol es un partido de fútbol y lo que se juega en él es un resultado concreto dentro de una competición. Pero los millares de personas que asisten a él son algo más que simples espectadores pasivos: son personas con memoria y conciencia individual y colectiva. De ahí que el estadio del Manzanares fuese el sábado pasado una pantalla privilegiada de por dónde van hoy las cosas de este país. No hubo —yo diría que afortunadamente— ese "clamor unánime" borreguil que acompañaba a Franco, a la hora de llegar las jerarquías del Estado al Manzanares. Ciertamente, no lo hubo. Pero sí la posibilidad de mostrar a los cuatro vientos los símbolos en que cada uno ve reflejadas aspiraciones muy profundas. Y hubo no la propagandística "unidad de los hombres y las tierras de España", pero sí la alegría de sentirse juntos y el respeto a las "minorías".

La minoría, en este caso, era la bética, dentro de las masivas oleadas de "ikurriñas". E hizo valer sus derechos al comprobar cómo, con justicia, David-Betis vencía a Goliat-Athletic... Madrid había sido una fiesta vasca durante toda la jornada, con una Puerta del Sol insólita como centro de diversión y contacto popular. Madrid se transformó en noche andaluza al finalizar el larguísimo partido. El equilibrio de la democracia se restauraba.

FERNANDO LARA